

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

REFERENCIA: INCIDENTE DE DESACATO EN TUTELA (CONSULTA SANCIÓN)  
ACCIONANTE: HEIDY LINA CASTRILLÓN BARRADA  
ACCIONADO: DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
RADICADO: 05001-31-05-022-2020-00336-00  
DECISIÓN: REVOCA SANCIÓN

En la fecha, veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021), el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver la CONSULTA de la decisión mediante la cual, se impuso sanción al Coronel **JAIRO ANTONIO CASTILLO COLORADO**, en calidad de representante legal de la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, por haber incumplido la orden impartida por el JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el pasado 15 de octubre de 2020, en la que se ordenó a la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, *“que en el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS HÁBILES siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, proceda a gestionar, autorizar y pagar a la señora HEIDY LINA CASTRILLÓN BARRADA, los salarios debidos en forma completa, del mes de septiembre de 2020, con los descuentos habituales”*.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiénose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente, doctor **FRANCISCO ARANGO TORRES**, consignado en los siguientes términos.

#### ANTECEDENTES DE LA CONSULTA.

Mediante escrito enviado a través del correo electrónico al Juzgado de Instancia el 09 de noviembre de 2020, la señora HEIDY LINA CASTRILLÓN BARRADA, solicitó iniciar incidente de desacato, con el fin que se ordenara a la accionada el cumplimiento del fallo de tutela.

El JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN una vez agotado el trámite correspondiente, mediante providencia del 16 de diciembre de 2020, sancionó por desacato al Coronel JAIRO ANTONIO CASTILLO COLORADO, en calidad de representante legal de la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, con sanción de arresto correspondiente a cinco (5) días y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por desacato a la orden de tutela impartida por el despacho, ordenando remitir en consulta ante esta Corporación la referida decisión.

Procede la Sala a resolver sobre la CONSULTA, previas las siguientes,

### CONSIDERACIONES

El Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el Artículo 86 de nuestra Constitución Política, consagra una sanción para quien incumpla la orden impartida por un Juez de tutela; dicha sanción puede consistir en **arresto hasta de seis meses y multa de hasta veinte salarios mínimos mensuales**; cuya imposición corresponde al Juez que profirió la sentencia, mediante un trámite incidental; la que será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres (03) días siguientes si debe revocarse o no la decisión.

Sobre este trámite incidental, se ha pronunciado la Corte Constitucional y ha sostenido que el peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el Juzgado o Tribunal que se pronunció en primera instancia, porque éstos conservan su competencia hasta tanto se restablezca el derecho vulnerado; y que para establecer la viabilidad de la imposición de la sanción por desacato no basta acreditar que materialmente se ha incumplido la orden de tutela, pues es necesario además demostrar que el funcionario que estaba obligado a cumplirla se mostró renuente y que de manera consciente se abstuvo de acatarla; esto es, se debe probar que el accionado incurrió en responsabilidad de carácter **subjetivo**; razón por la cual, el trámite del incidente debe brindarle a aquél la oportunidad de probar la imposibilidad de cumplir con lo dispuesto en la sentencia de tutela y de controvertir y solicitar pruebas, a fin de garantizarle el derecho de defensa.

La citada Corte en sentencia T-763 de 07 de diciembre de 1998, Magistrado ponente ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, adujo lo siguiente:

*“(…) Es el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquél es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento. Y si se trata del superior inmediato del funcionario que ha debido cumplir la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha debido existir una orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el inferior el fallo de tutela; dándosele un término de cuarenta y ocho horas porque así expresamente lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991 (…).”*

De acuerdo con dicha disposición, la sanción debe ser impuesta por el Juez que profirió la sentencia, por medio de un trámite incidental, y se debe consultar con el superior jerárquico, quien debe decidir dentro de los TRES (03) días siguientes si ésta debe revocarse.

Ahora, en Sentencia C-367 de 2014, la Corte Constitucional definió su postura frente al trámite que debe impartírsele al incidente de desacato como medida disciplinaria en reacción al incumplimiento de la protección constitucional que se reconoce en la sentencia de tutela y su diferencia con el trámite del cumplimiento, al manifestar:

*“(…) Conforme a la interpretación que este tribunal ha hecho del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991<sup>1</sup>, no es posible aplicar en este caso el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 y, por consiguiente, el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 129 del Código General del Proceso, porque el incidente de desacato a un fallo de tutela es un incidente especial. La especialidad de este incidente viene dada por la especialidad de lo que está en juego en un fallo de tutela, que es nada más y nada menos que amparar un derecho fundamental que ha sido vulnerado o sobre el cual se cierne la amenaza de vulneración, de tal suerte que dicho fallo es de inmediato cumplimiento, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución*

*(…)*

*De no cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario, que se concreta en el incidente de desacato. **Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas**, a saber: (i) comunicar a la persona inculpada la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo<sup>2</sup>. (Negrillas del Tribunal)*

Así las cosas, en este asunto está de por medio el cumplimiento de una orden judicial, mediante la cual se busca la protección inmediata y efectiva de unos

<sup>1</sup> Supra II, 2.6.2. y 2.7.2.

<sup>2</sup> Cfr. Sentencia T-171 de 2009.

derechos fundamentales, razón por la cual el representante legal de la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, no podía ignorar la orden impartida, la cual es precisa y por ello no se encuentra sometida a interpretación de ninguna naturaleza. Su cumplimiento se debió dar en el término indicado en el fallo de tutela objeto de cumplimiento a través del trámite incidental de desacato que se revisa en esta oportunidad.

De esta manera, analizado el caso concreto, se observa que después de proferida la sanción por parte del Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín el 16 de diciembre de 2020, la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA mediante memorial enviado al Juzgado de origen el 17 de diciembre del pasado año, informó que dio cumplimiento a la orden de tutela proferida el 15 de octubre de 2020, en el sentido efectuar el pago del salario de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020 a la accionante HEIDY LINA CASTRILLÓN BARRADA, dentro de los 5 días siguientes a dicha comunicación, manifestando además que se mantendría el pago mensual, hasta que se realizaran los procedimientos administrativos internos de la Junta Medico Laboral que se haría a la actora.

Ahora, si bien esta Sala intentó entablar comunicación con la señora CASTRILLÓN BARRADA, a través de los correos electrónicos [heidy.castrillon@buzonejercito.mil.co](mailto:heidy.castrillon@buzonejercito.mil.co), [Lina150472@gmail.com](mailto:Lina150472@gmail.com), y [assppmidefensa@gmail.com](mailto:assppmidefensa@gmail.com), para corroborar el pago efectivo de sus salarios, la accionante dio contestación a dicho requerimiento, informando que en efecto el pago le fue realizado.

Corolario de lo anterior, el accionado dio cumplimiento a la orden de la sentencia de tutela del 15 de octubre de 2020 proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de: *“gestionar, autorizar y pagar a la señora HEIDY LINA CASTRILLÓN BARRADA, los salarios debidos en forma completa, del mes de septiembre de 2020, con los descuentos habituales”*, por lo que considera la Sala, que la vulneración a los derechos fundamentales de la accionante ha desaparecido, configurándose un HECHO SUPERADO y en consecuencia habrá de REVOCARSE la sanción impuesta en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la sanción impuesta por el JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, al Coronel JAIRO ANTONIO CASTILLO COLORADO, dentro del incidente de desacato, adelantado por la señora HEIDY LINA CASTRILLÓN BARRADA contra la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL COMANDO DE GENERAL DE LA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, por las razones indicadas en la parte motiva de ésta providencia.

**SEGUNDO:** Se dispone la devolución del expediente al juzgado de origen, para los fines pertinentes.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Los magistrados,

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**

**JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° **008** del **21 DE ENERO DE 2021**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>

**Firmado Por:**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**  
**MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR SALA 011 LABORAL DE MEDELLÍN**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**  
**MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR SALA 013 LABORAL DE MEDELLÍN**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**  
**MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL**  
**TRIBUNAL SUPERIOR SALA 006 LABORAL DE MEDELLÍN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley  
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6426daa4274a1e2d9149455a2f2702d7ad9198f85a578653642db0e447fa4b69**

Documento generado en 20/01/2021 01:02:44 PM